

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por María Antonia Casillas, contra los procedimientos del Juez 3º local de Hermosillo, que la ha obligado por la fuerza á prestar trabajos personales, con violacion de garantías.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Fiscal dice: que las pruebas que se han rendido en el presente juicio de amparo solicitado por María Antonia Casillas, han venido á confirmar mas y mas la opinion que ya ha expresado en su escrito de fecha 17 del próximo pasado. Al que suscribe no le cabe duda alguna que con los procedimientos del Juez 3º local de Hermosillo, al querer obligar por la fuerza y contra su voluntad á servicios personales á la quejosa, le viola indudablemente las garantías que le concede el artículo 5º de la Constitucion general, que previene, que á nadie puede obligarse á prestar trabajos personales sin la justa retribucion y sin su pleno consentimiento; y tanto por este fundamento, como por estar apoyada esta solicitud en la fraccion 1ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, pido se proteja y ampare á la quejosa María Antonia Casillas, por los desmanes que contra ella ha cometido la autoridad local de Hermosillo.

Guaymas, Julio 9 de 1874.—Lic. José Monteverde.

Es copia que certifico. Guaymas, Julio 18 de 1874.—Lic. Monteverde.

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guaymas, Julio 17 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por María Antonia Casillas, contra el Juez 3º local de

Hermosillo C. Ignacio Escobosa, por haberla obligado á trabajar contra su voluntad en la casa del C. José Contreras; vista la comunicacion de esto, fechada en Hermosillo el 6 de Junio, en que contesta á este Juzgado, que aun no puede mandar el informe justificativo que se le pidió el 20 de Mayo, poniéndole tres dias de término con arreglo á la ley; visto el pedido fiscal, en que manifiesta la responsabilidad en que ha incurrido dicho Juez por la falta del informe, y pido, que si no se le forma causa, por lo menos se le haga un fuerte estradramiento; pidiendo además al Juzgado, decrete el amparo en favor de la Casillas; visto el informe de dicho Juez dado diez dias despues de su primera comunicacion; las pruebas presentadas por ambas partes; el segundo pedido fiscal en que dice estar fuera de toda duda, que con los procedimientos del Juez 3º local de Hermosillo, al querer obligar por la fuerza á la quejosa á servicios personales, viola en ella indudablemente las garantías que le concede el artículo 5º de la Constitucion general; vista la citacion para sentencia y cuanto mas consta y tener presente convino.

Considerando: que de las deposiciones de los testigos, cabo de policía Mariano Plaza y policía Miguel Lopez, se deduce que estos llevaron á la Casillas contra su voluntad á la casa del C. José Contreras, como lo manifiestan las mismas palabras de Lopez, cuando expresa, *que acompañó al cabo Mariano Plaza á la casa de D. Juan B. Méndez, donde habiendo el cabo mostrado al Sr. Méndez una orden escrita que llevaba del C. Juez Escobosa, "sacaron" á la Casillas y la "llevaron" á la casa de D. José Contreras; allí la "entregaron" y la dejaron; y cuando el testigo fué repreguntado por Escobosa, si para ejecutar su orden fué necesario emplear la fuerza, contestó que no hubo necesidad, lo que prueba bien claramente, que si la hubiera habido se hubiera empleado.*

Que los verbos usados por los testigos que

dicen que *sacaron, llevaron y entregaron*, no puede decirse jamás de una persona que sale, vá y se presenta á alguna parte con plena libertad, sino al contrario, de quien es llevada con una coacción, si no física, al menos moral, pero bastante para quitarle su libre voluntad.

Que aun cuando la Casillas no pueda ni deba ser obligada á servir contra su voluntad, esto no la libera de la obligación en que se halla de pagar á Contreras lo que justamente le deba y á lo cual será obligada por los jueces competentes.

Que los fundamentos alegados por el Juez responsable de que los hacendados y mineros se arruinarían si por los anticipos que hagan á sus sirvientes á cuenta de trabajo, no fueran estos obligados á cumplir su compromiso, no es de tomarse en consideración, pues de ninguna manera puede obligarse á nadie á prestar servicios personales contra su voluntad, sin embargo de cualquier compromiso que haga y anticipos que reciba.

Que en nada pugna este principio constitucional con las disposiciones de los artículos 396 y 397 de la ley de Justicia del Estado de 17 de Mayo de 1862, pues estos disponen; el primero: que el que reciba anticipos por su trabajo y se separe del servicio *fraudulentamente y con ánimo deliberado de tomarse lo ajeno*, se le tenga por reo de hurto; y el segundo, que los artesanos que recibieren materiales para alguna obra ó dinero para comprarlos, si por robarse este interés no cumplen con su compromiso serán tenidos como reos de hurto, en cuyos casos no se encuentra la Casillas, puesto que ofrece pagar; y de la que tal oferta hace no puede decirse que tenga ánimo deliberado de tomarse lo ajeno, debiendo ser obligada á satisfacer á Contreras, no en los términos que á ella convenga, sino en los que la ley disponga.

Considerando, por último: que aun en las declaraciones de los testigos citados por el Juez responsable, se vé que la Casillas no tiene voluntad en trabajar en la casa de

Contreras; este Juzgado, con los fundamentos expuestos y apoyado en los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, falla: 1º: La Justicia de la Unión ampara y protege á María Antonia Casillas, contra la disposición del Juez 3º local de Hermosillo, que la obligó á trabajar contra su voluntad en la casa del C. José Contreras, por violar con este procedimiento la garantía que le concede el artículo 5º de la Constitución general. 2º: Queda á Contreras su derecho á salvo para exigir ante los Tribunales del Estado, á la Casillas, lo que justamente le deba. 3º: Notifíquese, públiquese en el periódico oficial del Estado, y réntense estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revisión.

Fernando M. Astiazarán, Juez de Distrito de Sonora, definitivamente juzgando, así lo decretó, firmando con los testigos de su asistencia ordinaria.—*Fernando M. Astiazarán.*—A.—P. del Rincon.—A.—P. A. Piña.

Es copia que certifico. Guaymas, Julio 18 de 1874.—*Fernando M. Astiazarán.*—A.—P. del Rincon.—A.—P. A. Piña.—

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, 7 de Setiembre de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por María Antonia Casillas, contra los procedimientos del Juez 3º local de Hermosillo, que la ha obligado por la fuerza á prestar servicios domésticos al C. José Contreras, con violación de la garantía que consigna el artículo 5º de la Constitución de la República.

Considerando: que está plenamente justificado el acto de que se queja María Antonia Casillas, si bien el Juez 3º de Hermosillo, manifiesta en su informe, que su procedimiento es enteramente legal, en virtud de haberse obligado la quejosalibre y

expontaneamente á servir en la casa del C. Contreras.

Considerando: que el artículo 5º de la Constitucion federal, declara en la primera parte, que nadie puede ser obligado á prestar trabajos forzados, sin su pleno consentimiento.

Considerando: que el requisito de la plenitud del consentimiento tal como lo establece de una manera clara y terminante el precepto constitucional, es absoluto, sin restricciones ni escepciones de ninguna clase, motivo por el cual, prescribe ó no un contrato de locacion de servicios, haya ó no cumplido uno de los contrayentes con lo estipulado; desde el momento en que falta el consentimiento pleno, nadie puede ser obligado á prestar trabajos personales, pues no es mas que la trascripcion en otros términos, del principio de derecho, que toda obligacion de hacer se resuelva en la indemnizacion.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Sonora en 17 de Julio del presente año, que declara: primero: que la Justicia de la Union ampara y protege á María Antonia Casillas, contra el procedimiento del C. Juez 3º local de Hermosillo, que la obligó á prestar trabajos personales contra su voluntad: segundo: quedan á salvo los derechos del C. José Contreras, para exigir á la Casillas ante los Tribunales del Estado, lo que justamente le deba.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos, los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias*—*Miguel Anza*.—*Juan J. de*  
TOMO VI.—PARTE II.

*la Garza*.—*José María Lozano*.—*Ignacio Ramírez*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*Ignacio Altamirano*.—*Simon Guzman*.—*M. Zavala*.—*José García Ramírez*.—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 22 de Octubre de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## CRIMINAL.

*Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Guanajuato contra Trinidad Soto, por portacion de moneda falsa.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, dice: el 18 de Febrero próximo pasado, el C. Alcaide de la cárcel de Guanajuato, dió parte de que Trinidad Soto habia sido consignado por la Gefatura política á ese Juzgado, por habérsele encontrado dos monedas falsas. El Juzgado iniciando desde luego la averiguacion del caso, dió fé de la existencia de los monedas y procedió á tomar al acusado su declaracion paeparatoria; pero como resultase ser menor de edad, se lo nombró por curador al C. Ignacio Farfan, y con intervencion de este se recibió aquella diligencia: en seguida se examinó al Guarda aprehensor y á los testigos CC. Tomás Soto, Jesus Quevedo, Martin Olvera y peritos plateros CC. Sebastian Muñoz y Lorenzo Nuñez, pasándose en este estado la causa al estudio del Ministerio público, para que pida lo que le parezca conveniente.

El cuerpo del delito de portacion de moneda falsa, esta suficientemente comprobado con las diligencias practicadas; pero no sucede lo mismo respecto de la delincuencia del acusado, porque segun el dicho de este, del aprehensor y los testigos, solo resulta justificado, que Trinidad Soto se encontró tirado en el camino de Allende á esta Ciu-